

Alternativas para abordar la inseguridad alimentaria en las zonas rurales de Colombia

1

Jorge Leonardo Rueda Gil*

Gabriel Alfredo Torres-Rodríguez**

Palabras clave:

seguridad alimentaria; desarrollo rural; política pública; Colombia.

Clasificación JEL:

I38, O13, R11

Resumen

El estudio analizó alternativas de política pública para reducir la inseguridad alimentaria rural en Colombia al evaluar intervenciones de corto y largo plazo. La metodología empleó análisis de fuentes secundarias oficiales, consultas con expertos, análisis de actores, árbol de problemas y matriz de evaluación ponderada considerando costo-efectividad, equidad y factibilidad. Los resultados identificaron que el 31 % de hogares rurales experimenta inseguridad alimentaria por fallas de mercado, fallas gubernamentales y desigualdades estructurales. La evaluación priorizó dos intervenciones: las transferencias monetarias de emergencia y la reforma institucional de la CISAN. Se concluye que abordar esta problemática requiere combinar medidas asistenciales inmediatas con transformaciones institucionales de mediano plazo.

Cómo citar este artículo: Rueda Gil, J. L., & Torres-Rodríguez, G. A. (2026). Alternativas para abordar la inseguridad alimentaria en las zonas rurales de Colombia. *Equidad y Desarrollo*, (48), e5451. <https://doi.org/10.19052/eq.voll.iss48.5451>

Fecha de recibido: 24 de agosto del 2025

Fecha de aprobado: 3 de febrero del 2026

* Magíster en Políticas de Desarrollo Internacional y Economía. Especialista en Finanzas Sostenibles del PNUD. Correo electrónico: leor900@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3945-6475>

** Especialista en Econometría. Economista. Investigador Grupo de Investigación en Transformación Agraria (GITA) de la Universidad de los Llanos. Investigador del Observatorio del Territorio, Conflicto, Desarrollo y Paz de la Universidad de los Llanos. Correo electrónico: gatorres@unillanos.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6228-5230>



Keywords:

Food security; rural development; public policy; Colombia.

JEL Classification:

I38, O13, R11

Alternatives to Address Food Insecurity in Rural Areas of Colombia

Abstract

The study analyzed public policy alternatives to reduce rural food insecurity in Colombia evaluating short and long-term interventions. The methodology employed analysis of official secondary sources, expert consultations, stakeholder analysis, problem tree analysis, and weighted evaluation matrix considering cost-effectiveness, equity, and feasibility. Results identified that 31 % of rural households experience food insecurity due to market failures, government failures, and structural inequalities. The evaluation prioritized two interventions: emergency cash transfers and institutional reform of CISAN. The study concludes that addressing this issue requires combining immediate assistance measures with medium-term institutional transformations.

Introducción

Entre 713 y 757 millones de personas padecieron hambre en el 2023 y la inseguridad alimentaria moderada o grave afecta al 28,9 % de la población mundial (FAO *et al.*, 2024). En América Latina la prevalencia de hambre es del 6,2 %, pero con una brecha rural-urbana persistente: las zonas rurales registran inseguridad alimentaria del 31,9 % frente al 25,5 % en zonas urbanas (FAO *et al.*, 2024).

3

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (2024) reporta que el 25 % de la población colombiana (13 millones de personas) experimenta inseguridad alimentaria, existe una brecha rural-urbana amplia: 31 % de hogares rurales enfrenta esta condición frente al 24 % urbano. Los hogares rurales presentan mayores dificultades de acceso alimentario debido a ingresos precarios (mediana de gasto mensual per cápita de COP 330 511 versus COP 557 890 urbano), alta dependencia de una única fuente de ingresos (70 %) y predominio de empleos informales como jornaleo agrícola (24 %) y no agrícola (20 %), lo cual se traduce en menor consumo de alimentos comparado con zonas urbanas.

Las políticas gubernamentales para seguridad alimentaria rural en Colombia han tenido efectividad limitada pese a las instituciones creadas en el CONPES 113 del 2008 y la Ley 1355 del 2009, que incluyen la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) y los respectivos órganos departamentales (CISAN, 2022). Aunque el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 logró avances, persisten brechas considerables en zonas rurales que requieren mayor atención (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

Las zonas rurales presentan avances limitados por desafíos administrativos e incapacidad para abordar causas estructurales que distorsionan precios alimentarios. Esta situación se agrava por el histórico conflicto armado interno, causa del desplazamiento forzado de más de 6.8 millones de personas desde 1985 (Ruiz, 2011), lo cual afecta de manera directa la tenencia de la tierra y la producción alimentaria y limita el acceso en el campo, sobre todo en regiones con mayor presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. Esta complejidad exige soluciones que garanticen acceso a alimentos asequibles y de calidad para superar desigualdades estructurales y consolidar la paz territorial.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la inseguridad alimentaria en las zonas rurales colombianas, por medio de un diagnóstico estructural de sus causas, para, después, proponer y evaluar intervenciones de política que permitan mitigar las problemáticas identificadas.

Marco de referencia

4 Inseguridad alimentaria: determinantes

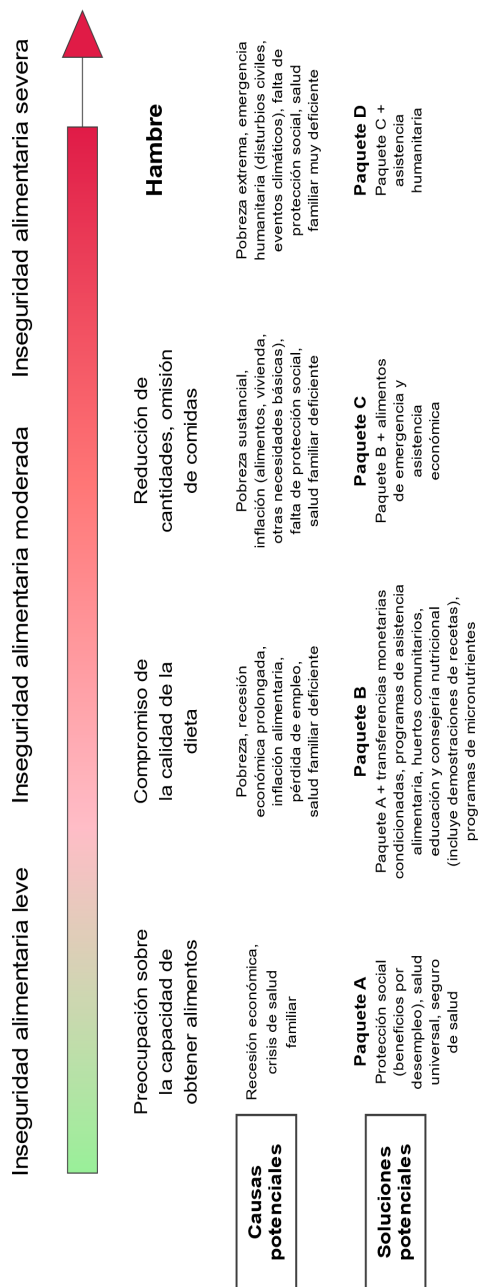
Las dimensiones fundamentales de la seguridad alimentaria son: disponibilidad (presencia física de alimentos), acceso (capacidad física y económica para obtenerlos), utilización (aprovechamiento nutricional adecuado) y estabilidad (mantenimiento constante de las tres dimensiones anteriores) (FAO *et al.*, 2022). Esta definición incluye cantidad, calidad dietética, inocuidad, idoneidad cultural, aspectos psicoemocionales y aceptabilidad social en la adquisición de alimentos (Pérez, 2024). Por lo tanto, expertos proponen dos dimensiones adicionales: agencia (capacidad de decisión sobre la alimentación) y sostenibilidad (viabilidad a largo plazo del sistema alimentario sin comprometer recursos futuros) (Clapp *et al.*, 2022).

La inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para un desarrollo normal y vida saludable (FAO, 2024). Se clasifica en tres niveles: leve (acceso presente, pero incertidumbre futura), moderada (reducción de calidad o cantidad de alimentos consumidos, incluso saltarse comidas) y grave (uno o más días sin comer u optar por alimentos menos nutritivos) (FAO, 2024; Pérez, 2024).

La figura 1 identifica causas potenciales para cada nivel junto con soluciones correspondientes. Esto proporciona un marco integral para comprender y abordar la inseguridad alimentaria en sus diferentes manifestaciones.

A su vez, Even y colaboradores (2024) propusieron un marco conceptual de doce barreras para la sostenibilidad de sistemas alimentarios en cinco categorías: economía política, sociotécnico, sociocultural, biofísico y socioeconómico. Las barreras de economía política ocupan el núcleo del sistema, pues el control de actores dominantes y fallas institucionales generan condiciones para otros obstáculos. El ámbito sociotécnico comprende tecnologías obsoletas y orientación inadecuada de la investigación, mientras que el sociocultural abarca resistencia a prácticas sostenibles y tendencia hacia modelos insostenibles. Las limitaciones biofísicas incluyen cambio climático y escasez de recursos y las socioeconómicas contemplan transformaciones demográficas, globalización y disparidades. Estas barreras operan de manera interdependiente con impactos conjuntos sobre la sostenibilidad alimentaria.

Figura 1. Niveles de gravedad, causas y soluciones de la inseguridad alimentaria



Fuente: adaptado de Pérez (2024)

Transferencias monetarias y gobernanza: entre el corto y mediano plazo

6 Las transferencias monetarias pueden impactar la resiliencia del hogar, estabilidad del sistema alimentario doméstico y salud mental de madres vulnerables (Liebe *et al.*, 2023). Sin embargo, aunque demuestran efectividad mejorando resultados nutricionales inmediatos, su potencial transformador permanece limitado sin cambios institucionales que aborden coordinación intersectorial, gobernanza participativa y sistemas de monitoreo robustos (de Groot *et al.*, 2017; Manley *et al.*, 2020). Investigaciones recientes confirman que abordar la seguridad alimentaria en países en desarrollo requiere enfoques multidimensionales que integren transferencias monetarias con reformas institucionales, como formalización de tierras, apoyo técnico, ayuda alimentaria y desarrollo de capacidades (Yeo *et al.*, 2025).

Se han caracterizado tres modelos de gobernanza alimentaria en América Latina: el modelo A emplea un enfoque ascendente con participación ciudadana directa, en tanto que los modelos B y C operan a través de estructuras descendentes dependientes de jerarquías gubernamentales. Dicho esto, Moncayo (2017) evidencia una desconexión entre marcos normativos e implementación práctica donde las estructuras de seguridad alimentaria legisladas no se consolidaron de forma operativa. Los mecanismos de coordinación incluyen plataformas interinstitucionales, sistemas de información integrados y planificación conjunta, cuya efectividad varía según contexto nacional y compromiso político. Los datos empíricos indican que los enfoques ascendentes producen resultados superiores en participación comunitaria y continuidad temporal de intervenciones (Moncayo, 2017).

La gobernanza efectiva de sistemas alimentarios implica abordar desafíos de integración derivados de la variedad de partes interesadas, falta de objetivos compartidos y ambigüedad respecto a causas y soluciones (Vignola & Oosterveer, 2025). También es clave la capacidad de coordinación del organismo rector, el grado de autoridad y la claridad de responsabilidad legal (Niu & Wu, 2024). Estos elementos son fundamentales para superar la fragmentación institucional que caracteriza la gobernanza de muchos sistemas alimentarios.

Políticas de seguridad alimentaria

Las políticas de seguridad alimentaria y nutricional son normas explícitas y tácitas que coordinan esfuerzos colectivos para mejorar el acceso a los alimentos (Dyball *et al.*, 2020). Estas políticas incluyen apoyo financiero gubernamental o políticas que impactan la producción y comercio de alimentos mediante incentivos de precios, subsidios, medidas fronterizas, intervenciones de mercado, apoyo a servicios generales y subsidios al consumidor (FAO *et al.*, 2022).

Las políticas alimentarias en América Latina se caracterizan por una tensión entre soberanía y seguridad alimentarias. La soberanía alimentaria promueve la agricultura local, agroecológica y de pequeña escala y defiende derechos territoriales de campesinos y pueblos indígenas junto con protección de la producción nacional, mientras que la seguridad alimentaria prioriza el comercio internacional, la agricultura intensiva y los programas sociales de alivio a la pobreza (Merino, 2022). Esta dualidad se manifiesta en la región andina, donde Bolivia y Ecuador incorporaron constitucionalmente principios de soberanía alimentaria como parte de un proyecto plurinacional; por su lado, Perú y Colombia profundizaron un modelo neoliberal de seguridad alimentaria. No obstante, incluso en los países que adoptan la soberanía alimentaria, la implementación práctica refuerza un modelo extractivista que favorece la agricultura transnacional sobre prácticas locales y tradicionales (Merino, 2022).

Por otro lado, Grisa y otros (2022) identificaron ocho marcos de referencia que guían las políticas alimentarias en América Latina: alimentos para el mercado, abastecimiento urbano, productivista, bienestar social, técnico alimentario, soberanía y seguridad alimentaria, ambientalizado e integrativo. Estos marcos coexisten sin reemplazarse con los tradicionales (productivista y de mercado), manteniendo hegemonía pese a nuevas perspectivas. No obstante, los autores revelan algunos desafíos, como la fragmentación de políticas, la resistencia de élites agrarias y la dificultad para coordinar acciones entre sectores gubernamentales, además de destacar la creciente influencia de nuevos actores (consumidores y chefs) en formulación de políticas, aunque las crisis externas tienden a reforzar enfoques tradicionales. Si bien existen innovaciones, se requiere una mayor integración entre políticas y actores junto con una democratización en la toma de decisiones para lograr sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos.

Asimismo, las rutas de política pública hacia seguridad alimentaria se dividen en dos enfoques principales: directo e indirecto. El enfoque directo se centra en la

demanda mediante tres estrategias: alimentación directa, programas de alimentos por trabajo para población rural y complementos al ingreso con transferencias en efectivo o especie. El enfoque indirecto se concentra en la oferta a través de estímulos a producción y adquisición de alimentos por medio de subsidios y créditos, además de medidas regulatorias como control de precios (Arellano, 2022). Estas rutas buscan atender las cuatro dimensiones de seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso, uso y estabilidad), aunque Arellano (2022) señala la falta de integralidad y articulación en la implementación, lo cual limita su efectividad para garantizar plenamente la seguridad alimentaria.

Marco normativo y seguridad alimentaria en Colombia

Colombia ha construido progresivamente un marco legal e institucional para abordar la seguridad alimentaria. Este proceso se inició con el CONPES 113 del 2008, que sentó las bases de la política y la arquitectura institucional vigente. Posteriormente, la Ley 1355 del 2009 elevó la seguridad alimentaria a la categoría de prioridad nacional y dispuso la creación de la CISAN. Esta comisión constituye el principal mecanismo de articulación intersectorial, encargado de coordinar las políticas y acciones entre las entidades del Gobierno nacional y las regiones. Los Acuerdos de Paz del 2016 introdujeron la Reforma Rural Integral, la cual incluye entre sus pilares un sistema de seguridad alimentaria orientado a fortalecer la economía familiar y los mercados locales, aunque su implementación ha enfrentado limitaciones administrativas y políticas que restringen su efectividad (Chavez, 2018).

La agricultura campesina, familiar y comunitaria constituye un sistema de producción gestionado por familias y comunidades, que combinan actividades de producción, transformación y comercialización de bienes agrícolas, y aporta el 70% de los alimentos básicos consumidos en Colombia, a pesar de las desventajas productivas frente a la agroindustria (Acevedo *et al.*, 2016; Forero *et al.*, 2016). Al tiempo, los circuitos cortos de comercialización reducen intermediación mediante ferias, mercados locales y esquemas de canastas que permiten una mayor captación de valor agregado y creación de espacios rural-urbanos (CEPAL, 2014; Craviotti & Soleno, 2015). Por su parte, la asistencia técnica agropecuaria se consolida a través del acompañamiento en desarrollo de contratos, generación de vínculos entre productores y compradores y apoyo a capacidades productivas, aunque enfrenta

limitaciones al implementarse de manera general sin considerar particularidades territoriales (Gáfaró *et al.*, 2019; Gutiérrez & Calle, 2019).

Métodos

9

El estudio analiza las políticas públicas con un enfoque racionalista, el cual permite examinar el problema de la inseguridad alimentaria rural por medio de técnicas cualitativas y cuantitativas, evaluar alternativas desde una perspectiva económica, política y administrativa y proponer soluciones basadas en evidencia (Weimer & Vining, 2017; Bardach, 2012). Este enfoque identifica fallas críticas —en particular fallas de gobierno asociadas a incentivos políticos, problemas de coordinación interinstitucional y debilidades administrativas— como elementos centrales del diagnóstico y del diseño de alternativas (Frija *et al.*, 2025; Wiget *et al.*, 2025). La investigación se fundamenta en el análisis de fuentes secundarias que incluyen datos oficiales del DANE, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), estudios nacionales como la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ICBF, 2015) y el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (Sabe Colombia 2015), así como documentos de política y evaluaciones previas.

Para nutrir el diagnóstico y formulación de alternativas, se realizaron entrevistas semiestructuradas con siete expertos en desarrollo rural. Este formato permitió una conversación dirigida, pero flexible, orientada a profundizar las causas del problema y la factibilidad de las propuestas. Las entrevistas se realizaron a representantes de la Federación Nacional de Cafeteros, DNP, FAO Colombia, Fedesarrollo, Universidad de los Andes, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FAO América Latina¹. Los entrevistados se seleccionaron mediante un muestreo intencional, considerando su experiencia en desarrollo rural, políticas alimentarias y participación en el diseño o implementación de la política agroalimentaria nacional. Este componente cualitativo permitió contrastar la evidencia documental con percepciones expertas sobre incentivos y restricciones que condicionan la acción pública (Sova *et al.*, 2013).

¹ Las perspectivas de los expertos son propias y no implican respaldo a las conclusiones definitivas del presente documento.

El análisis se estructuró a partir de una serie de herramientas metodológicas complementarias. Se utilizó el marco conceptual de FAO, IFAD, Unicef, WFP y WHO (2022) para caracterizar el problema. Se desarrolló un análisis de actores que evaluó sus intereses, disponibilidad de recursos y capacidad de movilización, clasificándolos en categorías clave, primarios, secundarios y externos. Este análisis destacó la desconexión entre los niveles nacional y local como factor estructural que limita la efectividad de las políticas alimentarias, lo que refuerza la necesidad de incorporar la dimensión de coordinación interinstitucional desde el diseño (Sova *et al.*, 2013). Adicionalmente, se empleó el árbol de problemas para mapear las relaciones causales identificadas, siguiendo su uso validado en contextos de inseguridad alimentaria por parte de la FAO y otros autores (FAO, 2011; Bhat *et al.*, 2025).

Para la evaluación de alternativas de política, se implementó una matriz de análisis multicriterio ponderada, herramienta utilizada en contextos donde existen objetivos en conflicto (Amorocho-Daza *et al.*, 2019). Se seleccionaron cuatro criterios comúnmente usados: equidad, costo efectividad, factibilidad política y factibilidad administrativa (FAO, 2014; Amorocho-Daza *et al.*, 2019), alineados tanto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible —en particular, los ODS 2, 10 y 16— como con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026” (2023). A cada criterio se asignó una ponderación, considerando tanto los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo con el criterio técnico de los expertos entrevistados.

La equidad recibió la mayor ponderación (30%), dado que constituye uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo (DNP, 2023). La costo-efectividad y la factibilidad política obtuvieron ponderaciones iguales (25% cada una). La primera se fundamenta en la estrategia de seguridad alimentaria del plan, que destaca la disponibilidad y asequibilidad como condiciones esenciales para garantizar el derecho humano a la alimentación, mientras que la segunda responde a la evidencia empírica que subraya la importancia de considerar los incentivos políticos para asegurar la adopción e implementación efectiva de las políticas (Frija *et al.*, 2025; Wiget *et al.*, 2025). Por su parte, la factibilidad administrativa recibió el menor peso (20%), ya que los expertos coincidieron en que toda política debe ser implementable con las capacidades y recursos institucionales existentes para lograr

un impacto efectivo². Finalmente, se desarrolló un marco de implementación en fases y tiempos específicos para las intervenciones propuestas.

Resultados

Diagnóstico de la inseguridad alimentaria rural

La inseguridad alimentaria rural en Colombia evidencia un panorama crítico que combina carencias alimentarias con condiciones socioeconómicas y de salud agravantes. Los indicadores disponibles muestran la magnitud del problema en términos de acceso a alimentos y sus consecuencias sobre salud y desarrollo de la población rural, particularmente en grupos vulnerables como la primera infancia (DANE, 2022b; DNP, 2023).

Tabla 1. Indicadores clave de inseguridad alimentaria en zonas rurales de Colombia

Indicador	Valor	Año
Población sin requerimientos calóricos mínimos	18,8 % (2.09 millones)	2021
Áreas rurales en riesgo alto/medio de inseguridad	95 %	2022
Población en pobreza monetaria	44,6 %	2021
Población vulnerable	45,3 %	2021
Niños <5 años con retraso en crecimiento (rural)	15,3 %	2015
Mortalidad por desnutrición en <5 años*	6,75 %	2020
Bajo peso al nacer	Tendencia creciente	1998-2021

*Por 100 000 niños menores de 5 años

Fuente: elaboración propia con base en DANE (2022), DNP (2023), Ministerio de Salud y Protección Social (2022).

2 Es importante aclarar que las ponderaciones otorgadas a cada uno de los criterios no pretenden ser exhaustivas y se realizan para justificar cuantitativamente el porqué se elige una política sobre otra.

Se evidencia un problema estructural en el que la inseguridad alimentaria se manifiesta como ciclo de privaciones que se refuerza a sí mismo. La combinación de pobreza y vulnerabilidad que afecta a nueve de cada diez habitantes rurales indica que las dificultades de acceso a alimentos son sistémicas. Esta situación se refleja en indicadores de salud con deterioro intergeneracional, donde los problemas nutricionales se transmiten desde la gestación (bajo peso al nacer) hasta la primera infancia con retrasos de crecimiento que superan promedios nacionales. La extensión territorial del problema que abarca prácticamente todas las zonas rurales indica una condición generalizada que requiere intervenciones estructurales.

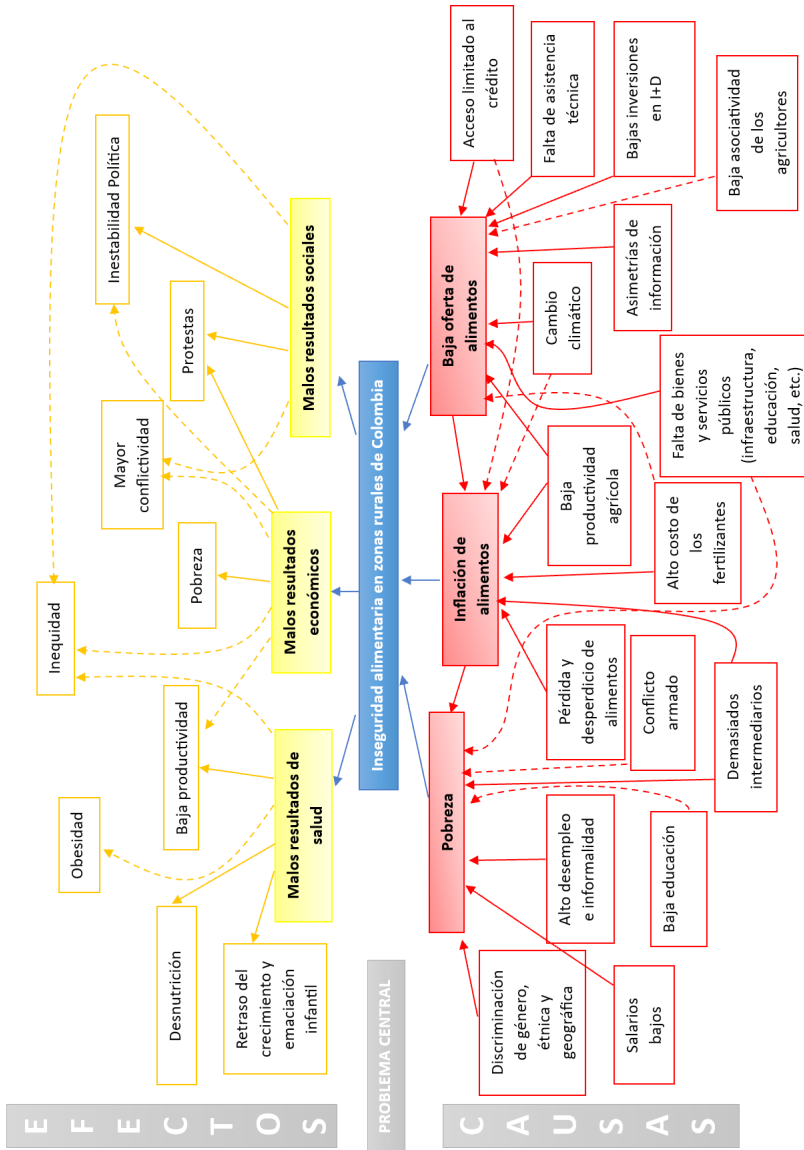
El árbol de problemas (véase la figura 2) revela una red compleja de factores interrelacionados. La producción y suministro de alimentos enfrenta limitaciones en el sector agrícola: solo el 16,4% de agricultores reporta uso de maquinaria y el 83,5% no recibe asistencia técnica (DANE, 2016). Esta situación se agrava por el limitado acceso a crédito (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2022) y los bajos niveles de asociatividad (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018).

La infraestructura para distribución de alimentos presenta deficiencias críticas en regiones que carecen de conectividad vial adecuada y requieren transporte aéreo o fluvial. Esto genera ineficiencias en sistemas de suministro: en la región metropolitana de Antioquia cerca del 70% de los 25 productos básicos consumidos, aunque producidos de manera local, provienen de zonas externas (FAO & Gobernación de Antioquia, 2016). En Putumayo aproximadamente el 70% del arroz y el 90% de los huevos son importados de otras regiones (FAO, 2017).

El incremento sostenido en precios de alimentos afecta sobre todo a familias pobres. La inflación anual en alimentos alcanzó el 24,1% en febrero del 2023 y se mantuvo en dos dígitos desde agosto del 2021. El impacto es diferenciado por nivel socioeconómico: hogares pobres y vulnerables experimentaron variaciones en el IPC de 14,34% y 14,31%, mientras que la clase media y alta registraron aumentos de 13,34% y 12,38% respectivamente (DANE, 2023).

Para finalizar, la ausencia de información confiable y actualizada sobre seguridad alimentaria impide un monitoreo efectivo. El Observatorio de Seguridad Alimentaria establecido en el 2013 para monitorear la implementación de políticas enfrenta dificultades operativas desde el 2018 por obsolescencia tecnológica (Roa, 2022). La falta de sistemas de información pública sobre precios de alimentos en áreas afectadas por emergencias o bloqueos impide la detección temprana y respuesta a crisis alimentarias.

Figura 2. Árbol de problemas



Fuente: elaboración propia.

Las consecuencias se manifiestan en tres dimensiones principales. En salud, además de indicadores de desnutrición infantil, el 2,2% de los adultos mayores presenta malnutrición, cifra que se duplica en áreas rurales (Ministerio de Salud y Protección Social & Colciencias, 2015). En términos económicos, la baja productividad y problemas de comercialización generan pérdidas del 70% de productos básicos consumidos en áreas metropolitanas que provienen de zonas externas a la región, aunque se producen localmente (FAO & Gobernación de Antioquia, 2016). En el ámbito social estas condiciones perpetúan ciclos de pobreza y desigualdad que afecta al 45,3% de la población rural (DANE, 2022b) y mantiene las comunidades en riesgo constante de inseguridad alimentaria.

Identificación de fallas críticas

Existe un entramado complejo de fallas sistémicas, las cuales incluyen deficiencias en funcionamiento de mercados y capacidad institucional del Estado, así como problemas estructurales históricos que configuraron las dinámicas rurales colombianas. El análisis de estas fallas con la identificación de roles y capacidades de actores involucrados permite comprender la naturaleza multidimensional de barreras que han limitado el impacto de intervenciones previas.

Fallas de mercado: la provisión insuficiente de bienes y servicios en el campo representa una falla fundamental. Persiste una sub-oferta de bienes públicos y privados como infraestructura vial, sistemas de riego, maquinaria, crédito, tierra, asistencia técnica, telecomunicaciones y estándares de seguridad alimentaria (Misión para la Transformación del Campo, 2015), agravada por falta de recursos, debilidad institucional y alta complejidad de problemas rurales (Ramírez *et al.*, 2015). Las asimetrías de información en mercados agrícolas constituyen otra falla con cadenas de intermediación ineficientes y desconexión entre productores y consumidores, evidenciada en casos como Antioquia, donde la mayoría de productos básicos recorren largas distancias que afectan precios y desestimula sistemas productivos locales (FAO & Gobernación de Antioquia, 2016).

Fallas de gobierno: la desarticulación institucional emerge como falla crítica demostrada en la ausencia de lineamientos prácticos para implementar la agenda a nivel local y pobre coordinación entre el Gobierno nacional y áreas rurales. Aunque la política recomienda crear Planes Locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, estos carecen de regulación y su formación depende de autonomía municipal (DNP, 2015). Los problemas de implementación se agravan por limi-

taciones en reporte y uso de información sobre seguridad alimentaria, pues los gobiernos locales raramente utilizan los indicadores para decisiones políticas y enfrentan desafíos institucionales y financieros en registro de información (DNP, 2015).

Fallas estructurales: la oferta alimentaria en Colombia refleja una dualidad estructural donde la Agricultura Campesina produce cerca del 70 % de los alimentos básicos y constituye el pilar de seguridad alimentaria nacional (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2025), pero enfrenta profundas desventajas productivas frente a la agroindustria orientada a exportaciones y materias primas. La concentración de activos es evidente con el 70,4% de unidades agrícolas menores a cinco hectáreas, lo cual limita economías de escala y adopción tecnológica en un contexto donde menos del 10 % incorpora tecnologías avanzadas (FAO, 2025). A ellos se suman brechas educativas significativas: el 64,8 % de productores solo alcanzan educación primaria y apenas el 5,8 % un nivel universitario (DANE, 2016, 2020). Lo anterior impacta en la productividad del sector, que creció apenas el 0,6 % entre el 2001 y el 2016 (Parra *et al.*, 2021) y se traduce en asimetrías de poder que afectan la capacidad de los pequeños productores para competir, integrarse a los mercados y acceder a recursos productivos.

Las relaciones de dependencia y exclusión se materializan en múltiples aspectos del sistema alimentario rural. La importancia de la agricultura campesina contrasta con condiciones institucionales y de mercado que perpetúan su vulnerabilidad, reflejadas en la baja asociatividad (14,7 % de agricultores), el limitado acceso a crédito (53 % sin acceso) y la alta informalidad laboral (90,8 %) (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018, 2022). Estas barreras estructurales se agravan por la ausencia de bienes públicos en el campo, pues solo el 62,8 % de hogares rurales tiene conexión a agua potable (DANE, 2022a), los persistentes problemas de conectividad y una débil institucionalidad que no ha logrado transformar estas relaciones históricas de exclusión.

Análisis de partes interesadas: en el mapeo de actores destacan los roles diferenciados (véase la tabla 2). Las instituciones del orden nacional, particularmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social y el DNP, cuentan con alta legitimidad política, pero enfrentan restricciones presupuestales y rigideces administrativas que limitan su capacidad de acción. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a pesar de su rol central en la política alimentaria, opera con apenas el 0,46 % del presupuesto nacional.

Tabla 2. Análisis de partes interesadas

16

Actor	Interés	Poder	Posición
Actores clave			
Presidente de Colombia	Alto	Alto	Promotor
Ministerio de Hacienda	Alto	Alto	Promotor
Ministerio de Salud y Protección Social	Alto	Alto-medio	Promotor
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Alto	Alto-medio	Promotor
DNP	Alto	Alto-medio	Promotor
Prosperidad Social	Alto	Alto-medio	Promotor
Actores primarios			
Gobiernos Locales	Alto	Medio-bajo	Defensor
Pequeños agricultores (<5 ha)	Alto	Medio-bajo	Defensor
Agricultores medianos/grandes (>5 ha)	Alto	Medio-bajo	Defensor
Habitantes rurales	Alto	Medio-bajo	Defensor
Actores secundarios			
DANE	Medio	Medio-bajo	Defensor
Agencia Desarrollo Rural	Alto	Bajo	Defensor
Banco Agrario/Finagro	Alto	Bajo	Defensor
Actores externos			
FAO/PMA/FIDA	Alto-medio	Bajo	Defensor

Nota. Promotor: apoya activamente la política. Defensor: apoya, pero con capacidad limitada de influencia. Poder: capacidad de influir en la implementación de la política. Interés: nivel de preocupación por el problema de seguridad alimentaria.

Fuente: elaboración propia.

A nivel territorial, los gobiernos locales y los pequeños productores, aunque son actores primarios en la implementación de políticas, presentan capacidades limitadas. Los municipios carecen de recursos técnicos y financieros suficientes, mientras que los pequeños agricultores (70,4% con menos de cinco hectáreas) enfrentan restricciones severas en acceso a activos productivos y capacidad de asociación. Esta asimetría en capacidades y recursos entre actores nacionales y locales contribuye a la persistencia de los problemas de implementación.

Propuestas y sus limitaciones

El análisis de soluciones para abordar la inseguridad alimentaria rural tiene dos objetivos: aumentar el acceso efectivo de hogares rurales a alimentos en el corto plazo y mejorar la producción y la distribución alimentaria en áreas rurales a corto y mediano plazo. Se evaluaron tres alternativas de política para cada objetivo.

Para el primer objetivo, se consideró mantener el *statu quo* con programas actuales como Familias en Acción y Programa de Alimentación Escolar, implementar transferencias monetarias de emergencia focalizadas en municipios con alto riesgo de inseguridad alimentaria o crear una agencia gubernamental para la compra y distribución directa de alimentos en áreas rurales (véase la tabla 3). Para el segundo objetivo, se evaluó mantener el arreglo institucional actual, reformar instituciones existentes y recursos o implementar una reforma rural integral (véase la tabla 4).

El análisis de estas alternativas se realizó mediante la matriz de evaluación ponderada. Cada alternativa de política se clasificó del menor (1) al mayor (3) cumplimiento de cada criterio. Posteriormente, la clasificación se multiplicó por el peso asignado a cada criterio y se suman los resultados para cada alternativa. Al final, se clasificaron del 1 al 3, siendo 1 la más deseable y 3 la menos deseable. Las alternativas del *statu quo* fueron descartadas por su insuficiencia demostrada para abordar el problema. La opción de provisión directa de alimentos y la reforma rural integral, aunque en potencial transformadoras, se consideraron inviables por sus altos costos administrativos y políticos, además de los riesgos de corrupción evidenciados en experiencias previas similares en Colombia entre 1944 y 1996. La reforma rural integral también enfrenta serias limitaciones debido a la persistencia del conflicto armado, el cual desincentiva la inversión y la productividad agrícola. Como lo señalan Arías, Ibáñez y Zambrano (2019), la violencia induce decisiones productivas subóptimas, como la sustitución de cultivos permanentes de mayor rentabilidad por actividades de menor riesgo y retorno. El conflicto no solo afecta la oferta agrícola, sino también la demanda: la prevalencia de la inseguridad alimentaria en hogares víctimas del conflicto alcanza el 43%, frente al 23% en hogares no afectados (WFP, 2024).

Tabla 3. *Ranking* de alternativas de política en el objetivo 1: aumentar el acceso efectivo a alimentos (corto plazo)

Alternativa	Equidad	Costo-efectividad	Viabilidad política	Viabilidad administrativa	Puntaje total	Ranking
<i>Statu quo</i>	0.30	0.50	0.50	0.60	1.90	2
Transferencias monetarias	0.90	0.75	0.75	0.40	2.80	1
Provisión directa	0.60	0.25	0.25	0.20	1.30	3

Fuente: elaboración propia.

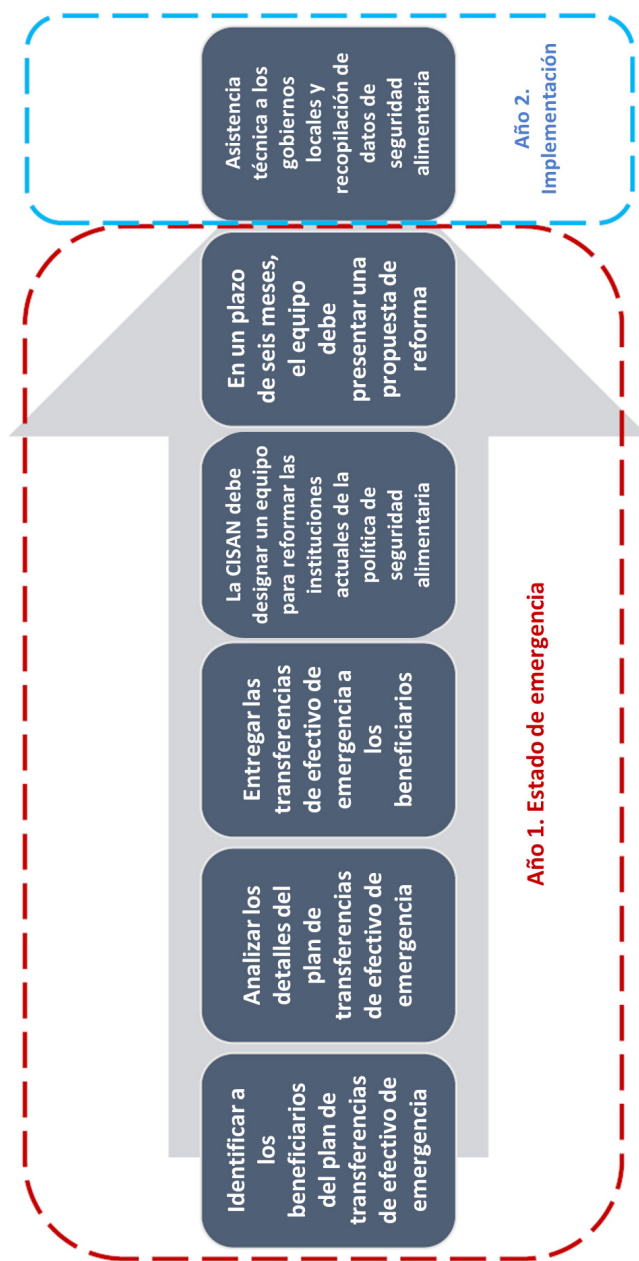
Tabla 4. *Ranking* de alternativas de política en el objetivo 2: mejorar la producción y distribución de alimentos (largo plazo)

Alternativa	Equidad	Costo-efectividad	Viabilidad política	Viabilidad administrativa	Puntaje total	Ranking
<i>Statu quo</i>	0.30	0.50	0.75	0.60	2.15	2
Reforma institucional	0.60	0.75	0.50	0.40	2.25	1
Reforma rural	0.90	0.25	0.25	0.20	1.60	3

Fuente: elaboración propia.

Las alternativas seleccionadas fueron transferencias monetarias de emergencia y reforma institucional con los puntajes más altos en evaluación ponderada (véase las tablas 3 y 4). Las transferencias monetarias se priorizaron por su capacidad de impactar el acceso a alimentos, su focalización en poblaciones vulnerables y su existencia de capacidad institucional para implementación, mientras que la reforma institucional se seleccionó por su potencial para mejorar coordinación y eficiencia de políticas sin requerir transformaciones estructurales más costosas. La implementación se estructura en dos años (véase la figura 3). El primer año incluye tres fases: identificación de beneficiarios por medio del Sisbén en municipios priorizados, diseño detallado con montos entre USD 43-94 (líneas de pobreza extrema y moderada) y ejecución de transferencias, además de conformar un grupo de trabajo para reforma institucional que en seis meses presente una propuesta detallando responsabilidades, jerarquías y recursos para la CISAN. El segundo año se dedica a implementar la reforma, fortalecer capacidades locales y desarrollar sistemas de información.

Figura 3. Esquema de implementación



Fuente: elaboración propia.

Discusión

20

La evidencia sobre desafíos estructurales de pequeños productores corrobora las fallas del sistema alimentario colombiano. Los pequeños productores son vulnerables al cambio climático con proyecciones de eventos meteorológicos más intensos, donde el 92 % reportó reducción en ingreso del hogar y el 33 % disminución en rendimientos de cultivos (Touch *et al.*, 2024). Esta vulnerabilidad se exagera por limitaciones en acceso a financiamiento en regiones remotas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2022). La exclusión financiera limita las posibilidades de inversión en tecnología, insumos productivos y adaptación climática, lo cual perpetúa un ciclo de baja productividad y pobreza rural.

Las limitaciones en implementación de políticas previas reflejan patrones de otros contextos en desarrollo. Los factores económicos como ingreso del hogar y costos domésticos son los contribuyentes más representativos a la inseguridad alimentaria rural (Lu & Carter, 2024), lo que valida el enfoque en transferencias monetarias. Sin embargo, existe una alta dependencia del ingreso fuera de la finca y pocos incentivos para intensificar la producción, donde el 90,8 % de trabajadores rurales opera en informalidad. Esta paradoja entre la necesidad de aumentar producción agrícola y la falta de incentivos económicos requiere intervenciones que aborden simultáneamente acceso inmediato a alimentos y transformación institucional del sistema alimentario rural, lo cual justifica el enfoque dual propuesto.

Los hallazgos sobre transferencias monetarias como intervención de corto plazo coinciden con la evidencia internacional que demuestra su efectividad. En cuatro países subsaharianos los programas gubernamentales mostraron mejoras en seguridad alimentaria y nutrición (Tiwari *et al.*, 2016), mientras que en India disminuyeron la inseguridad alimentaria moderada en 2,4 % y severa en 0,92 % (Kumar *et al.*, 2022). Los montos propuestos para Colombia (USD 43-94) se alinean con las prácticas regionales (Stampini *et al.*, 2023).

Aunque este estudio descartó la Reforma Rural Integral por su inviabilidad administrativa y política, la estrategia dual requiere complementarse con alternativas de largo plazo. El financiamiento de programas de agricultura familiar campesina con enfoque agroecológico constituye una ruta viable, dado que este modelo aporta el 70 % de los alimentos básicos nacionales (Forero *et al.*, 2016) y permite abordar barreras biofísicas y socioculturales que limitan la sostenibilidad alimentaria (Even *et al.*, 2024). Esta aproximación se vincula con la soberanía alimentaria (Merino, 2022), lo cual complementarías las transferencias monetarias

al fortalecer la oferta alimentaria local en las zonas donde se implementan. Los marcos de política diferencial que integran producción sostenible, agroecología y fortalecimiento organizativo (Grisa *et al.*, 2022) podrían superar los desafíos estructurales mediante una gobernanza que articule visiones entre diversos actores (Vignola & Oosterveer, 2025).

21

La coordinación se vuelve crítica en contextos rurales donde los regímenes de políticas agrícolas interactúan con dinámicas políticas globales, dinámicas ambientales y culturales geográficamente específicas, prácticas agrícolas prevalentes y nuevas tecnologías (Almås & Campbell, 2012). La reforma institucional propuesta para fortalecer la CISAN responde a estos desafíos al considerar que la complejidad del régimen internacional de asistencia alimentaria genera incertidumbre, problemas de coordinación y brechas en gobernanza (Delaville, 2023). La experiencia regional sugiere que las reformas institucionales enfrentan resistencias cuando no abordan relaciones de poder subyacentes, pues la gobernanza transformadora requiere cambios en estructuras organizacionales y en integración de visiones entre actores con intereses diversos (Vignola & Oosterveer, 2025).

Conclusiones

La inseguridad alimentaria en zonas rurales colombianas constituye un fenómeno multidimensional que articula carencias productivas, limitaciones institucionales y condiciones socioeconómicas adversas. El análisis identificó tres categorías de fallas sistémicas: funcionamiento de mercados agrícolas, capacidad estatal para implementar políticas públicas y desigualdades históricas en la estructura agraria. Estas fallas operan de manera interdependiente y configuran un escenario donde las intervenciones aisladas muestran impactos limitados sobre las condiciones de vida de la población rural.

Asimismo, la evaluación de políticas evidenció problemas de coordinación entre niveles de gobierno y ausencia de mecanismos efectivos de monitoreo. Los marcos normativos, aunque establecen estructuras formales para gestión de seguridad alimentaria, no lograron traducirse en acciones territoriales coherentes. Al tiempo que la coexistencia de enfoques contradictorios, junto con fragmentación de responsabilidades entre múltiples entidades, impidió consolidar una estrategia integral que aborde simultáneamente disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de alimentos.

Por último, la propuesta de intervención dual surge como respuesta a la necesidad de atender tanto las urgencias inmediatas como las transformaciones estructurales requeridas. Las transferencias monetarias de emergencia se orientan a garantizar el acceso inmediato a alimentos en los territorios más afectados, mientras que la reforma institucional busca establecer condiciones para la sostenibilidad de las intervenciones en el mediano plazo. Esta aproximación reconoce que el problema de la inseguridad alimentaria rural no puede resolverse exclusivamente a través de medidas asistenciales, sino que requiere modificaciones en los arreglos institucionales que determinan la producción, distribución y acceso a los alimentos.

Agradecimientos

Jorge Leonardo Rueda Gil participó en esta investigación gracias a una beca Fulbright Pasaporte a la Ciencia, bajo el foco reto país “Sociedad”, en el marco del programa Colombia Científica.

Referencias

- Acevedo, Á., Martínez, J., & Niño, C. (2016). *La agricultura familiar en Colombia*. Fondo Editorial Universidad Cooperativa de Colombia.
- Almås, R., & Campbell, H. (Eds.). (2012). *Rethinking Agricultural Policy Regimes: Food Security, Climate Change and the Future Resilience of Global Agriculture* (Vol. 18). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S1057-1922\(2012\)18](https://doi.org/10.1108/S1057-1922(2012)18)
- Amocho-Daza, H., Cabrales, S., Santos, R., & Saldarriaga, J. (2019). A New Multi-Criteria Decision Analysis Methodology for the Selection of New Water Supply Infrastructure. *Water*, 11(4), 805.
- Arellano, C. A. (2022). Seguridad alimentaria y política pública: Un desafío civilizatorio. *Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional*, 32(59), 1-28. <https://doi.org/10.24836/es.v32i59.1203>
- Arias, M. A., Ibáñez, A. M., & Zambrano, A. (2019). Agricultural production amid conflict: Separating the effects of conflict into shocks and uncertainty. *World Development*, 119, 165-184. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.11.011>

- Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis. The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Bhat, A., Tripathi, I., Mohapatra, P., & Bhagat, C. (2025). Reimagining stormwater management: sustainable drainage pathways for resilient Indian cities. *Environmental Conservation*, 53(1), 1-7. <https://doi.org/10.1017/S0376892925100222>
- CEPAL. (2014). *Agricultura familiar y circuitos cortos: Nuevos esquemas de producción, comercialización y nutrición. Memoria del seminario sobre circuitos cortos realizado el 2 y 3 de septiembre de 2013*. <https://hdl.handle.net/11362/36832>
- Chavez, D. B. (2018). Avances y dificultades en la implementación de la Reforma Rural Integral: Una deuda pendiente con el campo colombiano. *Revista Colombiana de Sociología*, 41(1Supl), 81-103. <https://doi.org/10.15446/rcs.v41n1Supl.67023>
- CISAN. (2022). *Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación*. <https://acortar.link/4gfPIU>
- Clapp, J., Moseley, W. G., Burlingame, B., & Termine, P. (2022). Viewpoint: The case for a six-dimensional food security framework. *Food Policy*, 106, 102164. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102164>
- Contreras-Nuñez, R., Espinoza, A., & Cáceres, P. (2025). Sustainability diet index: a multi-criteria decision analysis proposal for culinary preparations—A case study. *Frontiers in Nutrition*, 12. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1586886>
- Craviotti, C., & Soleno, R. (2015). Circuitos cortos de comercialización agroalimentaria: Un acercamiento desde la agricultura familiar diversificada en Argentina. *Mundo Agrario*, 16(33). <https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n33a01>
- DANE. (2016). *Censo Nacional Agropecuario 2014*. <https://acortar.link/Abd6sO>
- DANE. (2020). *Encuesta nacional agropecuaria (ENA)*. <https://acortar.link/SrQlla>
- DANE. (2022a). *Censo Nacional de Población y Vivienda 2018*. <https://acortar.link/2c6>
- DANE. (2022b). *Pobreza monetaria en Colombia: Resultados 2021*. <https://acortar.link/2hFqle>
- DANE. (2023). *Índice de precios al consumidor*. <https://acortar.link/W9ZMY2>
- De Groot, R., Palermo, T., Handa, S., Ragno, L. P., & Peterman, A. (2017). Cash Transfers and Child Nutrition: Pathways and Impacts. *Development policy review: the journal of the Overseas Development Institute*, 35(5), 621-643. <https://doi.org/10.1111/dpr.12255>

- 24 Delaville, C. (2023). A regime complex for food assistance: International law regulating international food assistance. *Journal of International Trade Law and Policy*, 22(3), 167-191. <https://doi.org/10.1108/JITLP-06-2023-0032>
- DNP. (2014). *Definición de categorías de Ruralidad (Informe temático para Misión para la transformación del campo)*. Dirección de Desarrollo Rural Sostenible.
- DNP. (2015). *Evaluación institucional y de resultados de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional PNSAN*. DNP; G-Exponencial. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/138_InformeFinal.pdf
- DNP. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia, Potencia Mundial de la Vida*.
- Dyball, R., Davila, F., & Wilkes, B. (2020). A Human Ecological Approach to Policy in the Context of Food and Nutrition Security. En G. S. Metcalf, K. Kijima & H. Deguchi (Eds.), *Handbook of Systems Sciences* (pp. 1-26). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0370-8_11-1
- Even, B., Thai, H. T. M., Pham, H. T. M., & Béné, C. (2024). Defining barriers to food systems sustainability: A novel conceptual framework. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 8, 1453999. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1453999>
- FAO. (2011). *A Response Analysis Framework*. <https://acortar.link/Djzsoh>
- FAO. (2014). *Testing Multi-Criteria Approaches For Food Safety Decision Making*. <https://acortar.link/HTBaSc>
- FAO. (2017). *Fortalecimiento a los Sistemas Públicos de Comercialización y Abastecimiento de Alimentos (SPAA)*. <https://acortar.link/FM5LS2>
- FAO. (2024). *Hambre e inseguridad alimentaria*. <https://www.fao.org/hunger/es>
- FAO. (9 de septiembre del 2025). *FAO Colombia impulsa la innovación y la tecnología en ExpoAgrofuturo 2025*. <https://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/en/c/1742222/>
- FAO, FIDA, Unicef, PMA, & OMS. (2024). *Versión resumida de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024: Financiación para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas*. <https://doi.org/10.4060/cd1276e>
- FAO & Gobernación de Antioquia. (2016). *Sistemas de abastecimiento alimentario. Bases para la inclusión de la agricultura familiar*. FAO. <https://www.fao.org/3/a-i5213s.pdf>
- FAO, IFAD, Unicef, WFP, & WHO. (2022). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0639en>

- Forero, J., Rodríguez, C. S., Gutiérrez, Á., & Nieto, A. (2016). Eficiencia económica de la agricultura familiar colombiana y sus potencialidades para superar la pobreza rural. En C. G. Cano, A. M. Iregui, M. T. Ramírez & A. M. Tribín U. (Eds.), *El desarrollo equitativo ompetitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia* (pp. 57-102). Banco de la República.
- Frija, A., Shiri, Z., Carpentier, I., Oumer, A., Gharbi, I., Rejeb, H., Ouerghemmi, H., & Dhehibi, B. (2025). Examining agricultural policy bias through the Kaleidoscope Model: a study of two strategic priorities in Tunisia. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 1-33. <https://doi.org/10.1080/21683565.2025.2575280>
- Gáfaró, M., Ocampo, J. A., Rueda, A., & Monroy, S. D. (2019). Revisión de experiencias de apoyo a la agricultura familiar. *Ensayos sobre Política Económica*, (91), 4-77. <https://doi.org/10.32468/espe.91>
- Gómez, D. T., & Aguirre, M. A. (2023). Seguridad alimentaria y desarrollo rural en 5 municipios del departamento del Caquetá, Colombia. Periodo 2018-2022. *Población y Desarrollo*, 29(57), 75-93. <https://doi.org/10.18004/pdfce/2076-054x/2023.029.57.075>
- Grisa, C., Niederle, P., Guéneau, S., Coq, Craviotti, C., Borrás, G., Campos, D., Ávila, H., Freguin, S., Miranda, J., & Albarracín, J. (2022). Food policies and the politicization of food: The Latin American experience. En *Public policies and food systems in Latin America* (pp. 25-66). Éditions Quæ.
- Gutiérrez, L. P., & Calle, C. A. (2019). Factores que afectan el servicio de asistencia técnica directa rural, en los modelos de transferencia tecnológica con enfoque territorial. *RHS-Revista Humanismo y Sociedad*, 7(2), 81-86. <https://doi.org/10.22209/rhs.v7n2a06>
- ICBF. (2015). *Encuesta Nacional de la Situación Nutricional ENSIN*. <https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional>
- Khan, F. U., Nouman, M., Negrut, L., Abban, J., Cismas, L. M., & Siddiqi, M. F. (2024). Constraints to agricultural finance in underdeveloped and developing countries: A systematic literature review. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 22(1), 2329388. <https://doi.org/10.1080/14735903.2024.2329388>
- Kumar, A., Mishra, A. K., Saroj, S., & Rashid, S. (2022). Government transfers, COVID-19 shock, and food insecurity: Evidence from rural households in India. *Agribusiness*, 38(3), 636-659. <https://doi.org/10.1002/agr.21746>
- Liebe, R. A., Adams, L. M., Hedrick, V. E., Serrano, E. L., Porter, K. J., Cook, N. E., & Misyak, S. A. (2023). Developing a conceptual framework for the relationship between food security status and mental health among low-income mothers.

- 26 *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, 1078811. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.1078811>
- Lu, H., & Carter, A. (2024). Social determinants of rural food security: Findings from Michigan's Upper Peninsula. *Journal of Rural Studies*, 107, 103256. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103256>
- Manley, J., Balarajan, Y., Malm, S., Harman, L., Owens, J., Murthy, S., Stewart, D., Winder-Rossi, N. E., & Khurshid, A. (2020). Cash transfers and child nutritional outcomes: A systematic review and meta-analysis. *BMJ Global Health*, 5(12), e003621. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003621>
- Marin, C. (2022). *Análisis de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional de Colombia con relación al aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional en los departamentos del Chocó y La Guajira*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/51688>
- Merino, R. (2022). The Geopolitics of Food Security and Food Sovereignty in Latin America: Harmonizing Competing Visions or Reinforcing Extractive Agriculture? *Geopolitics*, 27(3), 898-920. <https://doi.org/10.1080/14650045.2020.1835864>
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2018). *Lineamientos estratégicos de política pública. Agricultura campesina, familiar y comunitaria ACFC*. <https://www.minagricultura.gov.co/Documents/lineamientos-acfc.pdf>
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2022). *Plan indicativo de crédito Finagro*. Comisión Nacional de Crédito Agropecuario CNCA. https://www.finagro.com.co/sites/default/files/justificacion_tecnica_pic_2022_finagro_1_12_2021_vf.pdf
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (16 de abril del 2025). *La Tierra, donde todas las historias tienen un comienzo*. FAO. <https://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/fr/c/1736634/>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). *Informe final de la Implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2012-2019*. Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas. <https://acortar.link/pkgonk>
- Ministerio de Salud y Protección Social & Colciencias. (2015). *Sabe Colombia 2015: Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento*. <https://acortar.link/H7cSv4>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). *Indicadores básicos de salud 2022. Situación de salud en Colombia*. <https://acortar.link/nNdXVo>

- Misión para la Transformación del Campo. (2015). *El Campo Colombiano: Un camino hacia el bienestar y la paz*. DNP. <https://acortar.link/KmjHd3>
- Moncayo, M. V. (2017). *La consolidación de la gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional en américa latina. Elementos clave para una transición a partir del social network analysis y la experiencia de países que han aplicado leyes específicas* [Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=172539>
- Niu, L., & Wu, L. (2024). Study on Key Factors Influencing Coordination Effectiveness of Food Safety Coordinating Body: Lessons from the Chinese Context. *Foods (Basel, Switzerland)*, 13(2), 289. <https://doi.org/10.3390/foods13020289>
- Parra, R. I., Puyana, R., & Yepes, F. (2021, marzo 10). *Análisis de la productividad del sector agropecuario en Colombia y su impacto en temas como: Encadenamientos productivos, sostenibilidad e internacionalización, en el marco del programa Colombia más competitiva*. Fedesarrollo. <http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/4092>
- Pérez, R. (2024). Food and nutrition security definitions, constructs, frameworks, measurements, and applications: Global lessons. *Frontiers in Public Health*, 12, 1-10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1340149>
- Pronti, A., & Coccia, M. (2020). Multicriteria analysis of the sustainability performance between agroecological and conventional coffee farms in the East Region of Minas Gerais (Brazil). *Renewable Agriculture and Food Systems*, 36(3), 299-306. <https://doi.org/10.1017/S1742170520000332>
- Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. (2024). *Evaluación de seguridad alimentaria para población colombiana*. <https://acortar.link/ShCGta>
- Prosekov, A. Y., & Ivanova, S. A. (2018). Food security: The challenge of the present. *Geoforum*, 91, 73-77. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.02.030>
- Raj, S., Roodbar, S., Brinkley, C., & Wolfe, D. W. (2022). Food Security and Climate Change: Differences in Impacts and Adaptation Strategies for Rural Communities in the Global South and North. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5, 1-18. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.691191>
- Ramírez, J. C., Pardo, R., Acosta, O., & Uribe, L. (2015). *Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia: Brechas y políticas públicas*. CEPAL. <https://acortar.link/apiZmn>
- Roa, F. (22 de abril del 2022). Sin observatorio de seguridad alimentaria, Colombia camina a tientas y a ciegas. *La Silla Vacía*. <https://acortar.link/EHZXwj>

- Ruiz, N. Y. (2011). El desplazamiento forzado en Colombia: Una revisión histórica y demográfica. *Estudios demográficos y urbanos*, 26(1), 141-177.
- Schaafsma, M., Schreckenber, K., & Turner, R. (2025). Assessing multidimensional well-being impacts of sustainable agriculture options in rural Malawi using multi-criteria analysis. *Environmental Conservation*, 52(4), 196-204. <https://doi.org/10.1017/S0376892925000104>
- Sova, C., Helfgott, A., & Chaudhury, A. (2013). *Multilevel Stakeholder Influence Mapping in Climate Change Adaptation Regimes*. CCAFS Working Paper Series. <https://acortar.link/oJ6AMz>
- Stampini, M., Medellín, N., & Ibararán, P. (2023). *Cash Transfers, Poverty, and Inequality in Latin America and the Caribbean*. Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0005235>
- Tiwari, S., Daidone, S., Ruvalcaba, M. A., Prifti, E., Handa, S., Davis, B., Niang, O., Pellerano, L., Quarles Van Ufford, P., & Seidenfeld, D. (2016). Impact of cash transfer programs on food security and nutrition in sub-Saharan Africa: A cross-country analysis. *Global Food Security*, 11, 72-83. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2016.07.009>
- Touch, V., Tan, D. K. Y., Cook, B. R., Liu, D. L., Cross, R., Tran, T. A., Utomo, A., Yous, S., Grunbuhel, C., & Cowie, A. (2024). Smallholder farmers' challenges and opportunities: Implications for agricultural production, environment and food security. *Journal of Environmental Management*, 370, 122536. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122536>
- Vignola, R., & Oosterveer, P. (2025). Conceptualizing the governance challenges for food system transformation. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 9, 1-10. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1397574>
- WFP. (2024). *Evaluación de Seguridad Alimentaria para la Población Colombiana*. <https://acortar.link/ShCGta>
- Weimer, D., & Vining, A. (2017). *Policy Analysis*. Routledge.
- Wiget, M., Lienert, J., & Ingold, K. (2025). Understanding policy instrument preferences under conflicting beliefs and uncertainty. *Journal of Public Policy*, 45(4), 577-610. <https://doi.org/10.1017/S0143814X25100664>
- Yeo, G., Lansford, J. E., Gassman-Pines, A., & Cheah, C. S. L. (2025). How do different food policies impact food insecurity and health? A review and meta-analysis. *Food Security*, 17(3), 687-702. <https://doi.org/10.1007/s12571-025-01524-w>